

Apreciable Solicitante:

Con fundamento en los artículos 61, fracciones II, V y XII, 134 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace de su conocimiento la respuesta a su solicitud que fue registrada, mediante número de folio, **330024823000032** la cual se transcribe para pronta referencia:

"Por medio del presente ocurso, solicito se me proporcione la información pública que, como respuesta se llegue a generar u otorgar por la Dependencia a su digno cargo; ello con relación al contenido del documento adjunto a esta consulta. Cabe destacar que, la misma deberá ser examinada en todas y cada una de sus partes, incluyendo los vínculos digitales que le remitan adecuadamente a las carpetas respectivas, mismas que almacenan diversa información documental de relevancia, los cuales, se deben analizar a detalle para otorgar la contestación apropiada a la presente solicitud; formulada con fundamento en los artículos 1, 8 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de no ser la autoridad competente, les pido porfavor remitir está solicitud al Despacho de la Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala, para su debida atención y pronta respuesta, su correo electrónico oficial es: secretariaparticular@tlaxcala.gob.mx o también al correo de la autoridad responsable de todo esto lutorahe@gmail.com e ivan.garcia.100592@gmail.com, por su atención les agradezco enormemente en coadyuvar con el reconocimiento, respeto, protección y defensa de mis derechos humanos que fueron amplia y sistemática transgredidos por servidores públicos del Estado Mexicano. Cabe destacar que tuve que hacer esto, utilizar así la Plataforma Nacional de Transparencia, porque los medios de información solo publican lo que en Gobierno dice, así mantienen este tipo de asuntos ocultos, desinformado a la población con problemas que están sucediendo actualmente y que nadie hace nada, ni las Autoridades, y, mientras tanto, todos en el Gobierno violan impunemente nuestras prerrogativas, pero sobre la Ley, espero pueda compartir este mensaje en su portal de internet oficial o algún medio externo."

Para dar atención a su solicitud de información se hace de su conocimiento que las estructuras organizacionales del Fideicomiso ProMéxico fueron canceladas por la SFP, ya que éste ha cumplido con su objeto; por lo tanto, no hay información que reportar. No obstante, para privilegiar el principio rector de máxima publicidad, se hace del conocimiento la siguiente descripción histórica. ·Conforme a lo establecido en la Ley de Entidades Paraestatales, mediante DECRETO del Ejecutivo Federal, Publicado en el Diario Oficial (DOF) el 03 de mayo de 2019, se autoriza la desincorporación mediante extinción del Fideicomiso Público considerado Entidad paraestatal denominado ProMéxico. ·El artículo Tercero párrafo 3 de los Lineamientos para el proceso de desincorporación de este Sujeto Obligado (DOF 28/06/2022) establece que "el INDEP toma el control de ProMéxico para disponer de todo tipo de bienes, derechos. Activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos; además, realizará los actos necesarios para acreditar la extinción de los órganos de gobierno y de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento", por lo que el 31 de octubre de 2019 solicitó a la SFP dar por cancelada su estructura organizacional. ·El 29 de octubre de 2021, mediante Convenio de Cesión de Derechos y Obligaciones, el Fideicomiso cedió al INDEP a título gratuito, de manera pura y simple y de forma irrevocable todos los recursos activos, pasivos, derechos de cobro y obligaciones, así como cualquier otro que pudiera corresponderle y que a la fecha de firma del instrumento se desconozca a efecto de concluir el proceso de

desincorporación por extinción. •El 31 de octubre de 2021 se obtuvo el Balance Final de Liquidación, mismo que fue dictaminado por personal de Auditoría Externa RSM México Bogarín, S.C. •El 2 de febrero de 2023, se suscribió el convenio de extinción del Fideicomiso Público considerado entidad paraestatal denominado ProMéxico dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Economía en su carácter de Coordinadora de Sector y se celebró la única Sesión Extraordinaria del Comité Técnico, en la cual se aprobó la disolución de los órganos de gobierno, dando cumplimiento al transitorio segundo del referido Decreto de extinción del Fideicomiso el cual prevé que una vez suscrito el convenio de extinción que hace referencia el artículo Octavo del presente Decreto, se consideran abrogados el Decreto mediante el cual se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico, así como el diverso por el que se modificó éste, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente, así como los ordenamientos y normatividad emitidos con base en dichos Decretos. •El 19 de julio de 2023, se obtuvo la Constancia de Situación Fiscal, que acredita que el RFC del Fideicomiso se encuentra cancelado por cese total de operaciones.

En atención de lo anterior y una vez realizado el análisis de la solicitud de mérito y en aras del principio de máxima apertura o publicidad, resulta pertinente mencionar lo que el legislador expresó en la exposición de motivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente al derecho de acceso y principio de publicidad de la información:

Derecho de acceso a la información

Se define que el derecho a la información pública es un derecho fundamental, y que este comprende la libertad de: difundir, investigar y recabar información pública.

Principio de publicidad de la información

Se recoge el principio de publicidad, que implica que **toda la información en posesión** de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, agrupaciones políticas, fideicomisos y fondos públicos, así como de personas físicas, morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, es pública, excepto aquella que sea información clasificada.

En la misma exposición se señala que la materia prima del derecho de acceso a la información consiste en la obligación de documentar los actos públicos. Es decir, se debe **registrar y comprobar el uso y destino de recursos públicos y en general del ejercicio de atribuciones.**

La obligación expresa de documentar todo acto que derive del ejercicio de funciones desde que se crea hasta que es de conocimiento de los ciudadanos, así como la oportunidad de reutilizar la información.

El espíritu de la Ley General prever que los sujetos obligados deberán documentar todos los actos y decisiones que **deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones**, considerando, desde su origen, la publicación y reutilización de la información.

Se enfatiza, que la regla es la obligación del sujeto obligado a fin de atender una solicitud **no se traducirá** en contestar preguntas, sino en **dar acceso a aquellos documentos** fuente que permitan conocer u obtener la información del interés del particular.

De conformidad con lo anterior, se puede definir como contenido y alcance del derecho de acceso a la información pública, como la facultad que tiene toda persona para acceder a la información **generada, administrada o en poder** de toda autoridad, entidad, órgano u organismos públicos federal, estatal, del distrito federal y municipal, entendiendo que tal información pública es precisamente la **contenida en los documentos que dichos entes generen** o posean en ejercicio de sus atribuciones; por lo que debe quedar claro que el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su **alcance y resultado material, en el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos públicos**, con motivo de su ámbito competencial.

Concluyendo, la ley busca garantizar a las personas el acceso a los **documentos que obran en los archivos de las autoridades**.

Expuesto lo anterior y respecto de su solicitud de acceso, se hace de su conocimiento que, de la lectura de sus dichos se desprende que usted expone manifestaciones y bibliografía sobre información diversa, sin hacer una solicitud expresa o formular una pregunta o requerimiento de información que pueda atenderse mediante alguna expresión documental.

Por lo que, se determina que el conjunto de sus dichos y apreciaciones subjetivas no corresponden a una solicitud de acceso a la información pública y, por tanto, no se ajusta dentro del marco de atención de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 130, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), que en su parte conducente establecen lo siguiente:

‘Artículo 3.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan. ...’

‘Artículo 130.

(...) Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. ...’

La Ley en la materia tiene como finalidad que los particulares puedan tener acceso a los documentos generados, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados y que éstos ya se encuentren en sus archivos, es decir, que sean preexistentes como resultado de sus facultades, competencias o funciones, conforme lo permitan las características físicas o el lugar donde se encuentre la información.

Confirma lo anterior, lo establecido en el Criterio 03/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra señala:

‘No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.’

Por su parte el Criterio 16/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que cita:

Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero **la respuesta pudiera obrar en algún documento** en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental.

De esta manera, de acuerdo con la normativa señalada, se tiene que los sujetos obligados solo podrán dar acceso a los documentos que ya obren en sus archivos y que fueron documentados de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, por lo que, para efectos de garantizar el acceso a la información, no tienen la obligación de elaborar documentos “Ad hoc”.

Aunado a que, de las inferencias realizadas, no se ajustan a ningún tipo información generada, obtenida, adquirida, transformada y la respuesta que este sujeto obligado pudiera dar, no obra en ningún documento público.

Finalmente, se hace de su conocimiento que, en caso de no estar conforme con la tención emitida por este sujeto obligado, de conformidad con el artículo 147 de la LFTAIP usted puede ingresar un recurso de revisión en un periodo no mayor de quince días siguientes a la fecha de la notificación de esta respuesta, a través de los siguientes medios: de manera presencial mediante escrito libre en la Unidad de Transparencia ubicada en Avenida Insurgentes Sur 2073, Colonia San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México; a través del correo electrónico transparencia@indep.gob.mx; o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

